

traccion ó exportacion, á las leyes federales, y es conveniente que así se verifique, en interes de toda la República, que se perjudicaría notablemente si á cada uno de los Estados de la Federacion fuera lícito establecer reglas sobre su produccion, circulacion y exportacion.

Cuarto: que la necesidad de conservar el valor de la moneda, como una mercancía universal, indispensable para realizar toda clase de transacciones mercantiles entre los diferentes pueblos de la tierra, al abrigo de alteraciones caprichosas y bajo la influencia de leyes uniformes, ha hecho que esta materia se someta á convenciones especiales entre las naciones, poniéndola bajo la proteccion del derecho internacional.

Quinto: que el Gobierno de la República á quien competía celebrar una convencion de esta especie, en el caso de que así pareciera útil á los intereses mercantiles de la misma República, no podía hacerlo, si cada Estado de la Federacion tuviera libertad de gravar la circulacion de la moneda cualquiera que fuera la forma y el nombre de ese gravámen, que en último análisis vendría á producir alteraciones en el valor de la misma moneda.

Sexto: que por estas razones, el Gobierno del Estado de Jalisco ha sido incompetente para gravar los caudales extraídos fuera de su territorio, con un derecho, cualquiera que sea su denominacion y carácter.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 72 fracción 23, 112 fracción 1ª, se decretar que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guadalajara, en 5 de Junio del presente año en que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á las casas de comercio que sacaron guías en la Jefatura de Hacienda de dicha Ciudad de Guadalajara el día 11 de Mayo último, para exportar por el puerto de Veracruz, siendo estos: los Sres. Alvarez Araujo y Cª, Otting y Cª, R. Miravete, Otting Riensch, Mauricio Rohde, Fer-

nandez Somellera Hermanos, Angel B. y Puga, T. I. Kunhardt y Francisco Martinez Negrete y Cª.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José María Iglesias.—Miguel Auza.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José G. Ramirez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Agosto de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por la Sra. Dª María Concepcion Gutierrez, como albacea de la testamentaria de D. Rafael Martinez Perea, contra el C. Recaudador de contribuciones de la misma Ciudad, que mandó retazar la casa número 7 de la calle de la Alhondiga para cubrir un adeudo de contribuciones.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que al evacuar el traslado que en este juicio se le corrió y se vé á fojas 10, se impuso detenidamente del escrito de queja, y se convenció de que el objeto de este amparo, no era otro que la retaza de la finca embargada, y por tanto se ocupó de ese punto único, esencial, que

abrazo dicho escrito. En consecuencia, no tiene al presente el Promotor cosa nueva que exponer y reproducir en el contenido de dicho traslado; si no estuviera ya decidido contra su opinion, que no hay violacion del artículo 14 de la Constitucion, que es el directamente aplicable al caso de la retaza.

Esto supuesto, y siendo cosa manifiesta, que con la declaracion judicial de no haber violacion de garantías se termina en nuestro caso la contienda judicial y se dio por fenecido el juicio, el Fiscal se limita a pedir se eleve el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Querétaro, Mayo 28 de 1874.—*J. González.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Querétaro, Junio 3 de 1874.—Visto el presente expediente de amparo solicitado por D<sup>a</sup> Maria Gutierrez como albacea de D. Rafael Martinez Perea, por la retaza que el gefe de contribuciones en el Estado mandó practicar en la casa número 7 de la calle de la Alhondiga, por embargo que hizo de ella en virtud del adeudo vencido de aquellos impuestos.

Considerando: que conforme á la Constitucion en su artículo 97, no correspondiendo á los Juzgados y Tribunales de la Federacion, conocer sobre los casos que se susciten sobre el cumplimiento y aplicacion de una ley particular del Estado de Querétaro.

Considerando: que la queja interpuesta por la Sra. Gutierrez, solo se veria, sobre que contra ley del Estado se procedió por la oficina de contribuciones á la retaza de la citada finca, segun se vé de su escrito de fojas 1<sup>a</sup> de este expediente, atendiendo á que si bien del espíritu del artículo 88 y lo expreso en el artículo 135 de la ley orgánica de la Administracion de Justicia del Estado, no debe haber retaza en los avalúos de los objetos embargados, y á que si tam-

TOMO VI.—PARTE II.

bien la oficina de contribuciones debió acatar esta disposicion, no se trata en el caso del cumplimiento ni de la aplicacion de leyes generales, no estando consignada como garantía individual, que á los deudores fiscales no se les retazen los objetos que les embarga la Hacienda pública en uso de la facultad coactiva; y no siendo necesario esclarecer punto alguno de hecho, y de consiguiente sin necesidad de prueba, el C. Juez dijo: 1<sup>o</sup>: que la Justicia federal no ampara á D<sup>a</sup> Maria Gutierrez en el juicio promovido por la disposicion de la oficina de contribuciones, sobre que se retaze la finca embargada. 2<sup>o</sup>: que conforme al artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se impone á la Sra. Gutierrez cinco pesos de multa; y 3<sup>o</sup>: publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Estado, mandándose copia al Semanario Judicial con el mismo objeto, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Hágase saber.

Así lo pronunció, mandó y firmó el C. Lic. José Guadalupe Hernandez, Juez 3<sup>o</sup> suplente del Juzgado de Distrito, por ante mí de que doy fé.—*J. Guadalupe Hernandez.*—*Francisco Ruiz*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio 2 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por la Sra. D<sup>a</sup> Maria Concepcion Gutierrez como albacea de la testamentaria de D. Rafael Martinez Perea, ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, contra el C. Recaudador de contribuciones de la misma Ciudad que mandó retazar la casa número 7 de la calle de la Alhondiga para cubrir un adeudo de contribuciones, con cuyo procedimiento creó la quejosa, que se violan las garantías que reconocen los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal, en virtud de que la ley de Tribunales del Estado prohíbe la retaza en los remates, y por que aunque esta autori-

dad es competente, no funda la causa legal de su procedimiento; visto el informe del C. Recaudador de contribuciones en que expresa que la Sra. no tiene personalidad alguna reconocida legalmente, y que al proceder á la retaza de la mencionada finca se ha sujetado á las leyes generales y particulares del Estado, sin poder atender á la de tribunales, que la quejosa está por no considerarla aplicable al caso. Visto el parecer fiscal; la sentencia que pronunció el Juez 3º suplente de Distrito por escusa del propietario y del primer suplente y recusacion del 2º, y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; y Considerando: que de las mismas constancias no aparece que con los procedimientos del C. Recaudador de contribuciones de la Ciudad de Querétaro, se hayan infringido los artículos constitucionales que la quejosa invoca, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez tercer suplente de Distrito de Querétaro, en el primer punto que declaró que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D<sup>a</sup> María Gutierrez, contra la disposicion de la oficina de contribuciones, sobre que se retaza la finca embargada.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. AUSA.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Simon Guaman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Agosto 7 de 1874.—*Enrique Landa.*

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra José María Proa y otros, por el delito de sedicion.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL,

C. Juez de Distrito.

Practicadas por el Juez de Letras de Zinapécuaro las diligencias relativas á averiguar el delito de sedicion contra las autoridades legítimamente constituidas, que protestaron el cumplimiento de las leyes de reforma como adiciones constitucionales, resulta plenamente comprobado, que la noche del 29 de Octubre de 1872, se juntaron por la noche en el pueblo de Arazó el Bajo, los reos de esta causa, y formando una reunion tumultuaria gritaron mueras públicamente contra el C. Presidente de la República, las leyes de reforma y las autoridades del citado pueblo.

Los hechos que forman la materia de esta causa, se hallan plenamente justificados por la declaracion de las mismas autoridades, y de las personas que deponen en las diligencias que forman el sumario, resultando únicos responsables Vicente Chavez, José M<sup>a</sup> Proa, Longinos y Valentin Torres, Epitacio Vega, Lucas Garcia y Juan y Gregorio Corona, sin que en manera alguna les sirva de excepcion la ebriedad, por no hallarse acreditada en los términos de la fraccion 3ª del art. 34 del Código penal.

El cargo de que se ha hablado se reagrávó en la confesion respectiva, con la circunstancia de haberse pretendido por los sediciosos asesinar á las autoridades de Arazó; pero como sobre esto no hay una prueba bastante, segun es de verse en las informaciones, supuesto que lo que se refiere sobre este particular no indica la verdadera intension, no hay para que hacer mérito de esta circunstancia al juzgar el delito.

Como agravante, se debe tomar en cuen-